INTERPONE ACCIÓN DE HABEAS CORPUS

Excmo. Tribunal:

Horacio Verbitsky, en mi carácter de representante legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), constituyendo domicilio en Calle 49, nro. 918, local 1, casillero nro. 624, de la ciudad de La Plata, junto a los letrados que me patrocinan Víctor Abramovich Tº VIII Fº 101 CASM y Rodrigo Diego Borda, Tº IV Fº 81 CAQ, con domicilio constituido en el mismo lugar, nos presentamos respetuosamente a V.E. y decimos:

I- PERSONERÍA:

Horacio Verbitsky, como surge del Estatuto Social y Acta de designación, cuya copia se acompaña, se presenta en calidad de representante legal del Centro de Estudios Legales y Sociales, con domicilio legal en Rodríguez Peña 286, piso 1ro. de la Capital Federal.

II- OBJETO:

Esta acción se presenta, en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional (CN), en amparo de todas las personas privadas de su libertad en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires detenidas en establecimientos policiales superpoblados y de todas aquellas detenidas en comisarías, a pesar de que legal y constitucionalmente, su alojamiento debería desarrollarse en centros de detención especializados. Ambas situaciones constituyen agravamientos arbitrarios de las condiciones de detención legal y hacen procedente esta acción (art. 405 Código Procesal Penal, en adelante CPP).

Solicitamos a V.E. que asuma su competencia respecto de la situación de este colectivo de personas, se repare la situación descripta y se determine un mecanismo que evite la reiteración de estos problemas en el futuro.

Para ello, requerimos la designación de la audiencia prevista en los artículos 412 y 413 CPP y la producción de prueba pertinente para que V.E. compruebe en su total extensión las consecuencias de la situación irregular en la que se encuentran las personas privadas de su libertad en comisarías.

Solicitamos a V.E., que luego de esas verificaciones, se pronuncie expresamente acerca de la ilegitimidad, constitucional y legal, del encierro de estas personas en las condiciones en las que se hallan.

Por otra parte, requerimos que V.E. ordene el cese de esa situación y a tal fin entendemos que es necesario el establecimiento de una instancia de ejecución en la que, a través de un mecanismo de diálogo entre todos los actores involucrados pueda determinarse, -y controlar V.E.-, el modo en que la Administración podrá hacer efectivo el cese de la detención de personas en condiciones oprobiosas.

Han existido muchas resoluciones referidas a la misma cuestión pero sólo han abarcado aspectos parciales del problema que aquí se denuncia. En consecuencia, han sido ineficaces en punto a prevenir la reiteración de las violaciones. Ello hace imperioso la intervención de V.E. a fin de que la decisión final tenga efectos relevantes respecto de la situación generalizada en la provincia.

Está claro, no se trate de que V.E. defina de qué modo debe subsanarse el problema, pues ésta es una competencia de la Administración. Sin embargo, estamos convencidos de la necesidad de que, en la ejecución de la orden de cese de la detención V.E. despliegue de modo vigoroso su poder jurisdiccional ejerciendo plenamente la función republicana de último custodio de los derechos individuales.

En función de ello, solicitamos que V.E. verifique si la Administración ha previsto ya el establecimiento de un programa de acción dirigido a reparar las infracciones constitucionales que hoy se verifican en las comisarías o que, en su caso ordene su elaboración y que, de modo constante y hasta su conclusión, controle el cumplimiento de este plan por parte de la Administración, a fin de asegurar que la deplorable situación de las comisarías bonaerenses reciba una solución al fin (art. 415 CPP).

III- COMPETENCIA

V.E. resulta competente en razón de lo dispuesto por el artículo 406 del CPP que dispone que: “El Hábeas Corpus podrá ejercerse ante cualquier órgano jurisdiccional de la Provincia. (...) En los casos en que se formule ante un Tribunal, actuará la Sala en turno...”.

Si bien V.E. ha sostenido que, en principio, no es este tribunal, “cualquier órgano jurisdiccional” en los términos del artículo 406 de la ley de rito (sent. del 19/10/98 en causa 14, “Gorosito Campos”; ídem del 11/6/99 en causa 269, “Madera”), su jurisprudencia ha posibilitado la deducción directa de este tipo de acción en casación mediando una manifiesta importancia o gravedad institucional en la cuestión que se somete a su decisión (sent. del 19/10/98 en causa 14, “Gorosito Campos”; ídem del 11/3/99 en causa 174, “Blanco”; ídem del 18/6/99 en causa 131, “Penczarsky”; ídem del 9/8/99 en causa 508, “Magallán”; ídem del 23/9/99 en causa 159, “Alcántara”).

La situación que denunciemos resulta de una gravedad inobjetable y es imperioso que V.E. se avoque a su tratamiento y resuelva la problemática que comprende a la totalidad de las personas que se encuentran privadas de su libertad en las comisarías de la provincia de Buenos Aires.

Numerosos planteos han sido realizados en relación con este tema por los respectivos defensores oficiales, fiscales y jueces e inclusive organizaciones de vecinos en el ámbito de los distintos departamentos judiciales de la provincia, pero la entidad del problema enunciado exige sin dudas su análisis global, debiéndose descartar la viabilidad de los reclamos particulares para alcanzar una solución efectiva.

La denigrante situación de los presos en comisarías no puede seguir siendo tratada mediante enfoques parciales que acotan su campo de análisis y limitan por ello la respuesta jurisdiccional posible. Clausurar el calabozo de una comisaría y trasladar a los detenidos a otro lugar de similares características sólo posibilita que el mismo problema se traslade y reproduzca en otro espacio físico. El colapso del sistema de detención en comisarías, es decir, el carácter terminal de la situación, obliga a su ponderación de manera total, directa y sin dilaciones, procurándose así que la solución que se logre alcanzar sea realmente la adecuada.

La casación es un medio destinado a asegurar la vigencia de la ley y la unificación jurisprudencial, atento lo prescripto en el art. 4 de la ley 11.982, resultando entonces pertinente el planteo de esta acción ante V.E.

La propia jurisprudencia del Tribunal de Casación ha fijado además la necesidad de que sea ese mismo tribunal el que actúe allí donde la relevancia de la cuestión requiere que un estándar legal sea fijado a fin de ordenar coherentemente la actuación de todos los tribunales penales de la provincia, proyectándose en estos casos “[c]omo telón de fondo una competencia residual de este órgano judicial fundamentada en la importancia institucional de la cuestión” (sent. del 7/9/99 en causa 316, “Recurso del Fiscal General del Departamento Judicial de Mar del Plata”).

En fin, “la excepcional intervención del Tribunal de Casación Penal a través del hábeas corpus interpuesto originariamente está reservada para aquellos casos en que los mecanismos procesales normales, rectamente empleados, no son susceptibles de restablecer el goce del derecho constitucional pretensamente violado” (sent. del 23/3/00).

IV- LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL CELS:

El CELS puede ser parte en este proceso en razón de que, por las particularidades del caso, en el que se discuten cuestiones atinentes a la afectación de derechos humanos y a la dignidad de la persona de modo

difuso, es una de aquellas organizaciones expresamente autorizadas para ello por la norma del artículo 43 constitucional.

En efecto, el CELS, es una asociación civil sin fines de lucro entre cuyos fines se encuentra “la defensa de la dignidad de la persona humana, de la soberanía del pueblo, del bienestar de la comunidad” y la promoción o ejecución de acciones judiciales destinadas a procurar la vigencia de estos principios y valores, en particular asumiendo la representación de personas o grupos afectados en causas cuya solución supone la defensa de los derechos humanos (según art. 2º del Estatuto del CELS). Al respecto, desarrolla una particular acción dentro de lo que son las condiciones carcelarias en nuestro país. Así, puede fundar su legitimación en el artículo 43 constitucional que prevé que para la defensa de los “derechos de incidencia colectiva en general” se encuentran legitimados “el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley...”.

Es jurisprudencia asentada ya que la defensa en juicio de ciertos derechos reclama el reconocimiento de aptitud procesal a determinadas instituciones, especialmente dedicadas a su tutela.. Con fecha 16 de abril de 1996, en los autos nro. 8364, “Bonavota, Liliana Graciela s/infr. Ley 23.592”, de la Secretaría 8 del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 4, se tuvo por parte querellante a la entidad no gubernamental “Delegaciones de Asociaciones Israelitas Argentinas” (DAIA). En ese proceso se investigaba un presunto acto de discriminación cometido en contra de una persona individual e identificada, sin perjuicio de lo cual, y ante la afectación de intereses difusos, se otorgó el rol de parte querellante a la entidad mencionada. También fue aceptada la petición de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires de ser tenida como parte querellante en la defensa de los vecinos del barrio de Mataderos ante un hecho de contaminación (c. Nro. 5789/99, “NN s/infr. Ley 24.051).

El 10 de octubre de 2000, la Cámara Nacional Electoral trató puntualmente la cuestión de la aptitud procesal del CELS, a la luz del art. 43 CN, en una acción de amparo destinada a discutir el derecho al sufragio de las personas privadas de su libertad sin condena firme en su contra. La Excma. Cámara estableció en esa ocasión que “... de no otorgarse legitimación a una asociación como la que promueve la presente causa la norma contenida en el art. 43 de la Constitución Nacional quedaría convertida en letra muerta” (Cnac Electoral, “Mignone, Emilio Fermín s/promueve acción de amparo” (Expte. Nro. 3108/99 CNE; Fallo Nº 2807/2000; rta. 10/10/00).

La Cámara señaló que “La norma constitucional citada [CN, 43] hace referencia a las ‘asociaciones registradas conforme a la ley’, agregando que dicha ley deberá determinar los requisitos y formas de organización.

La falta de tal ley, empero, no puede condicionar el ejercicio del derecho que debe reglamentar de modo que importe, en los hechos, su negación. La génesis misma del amparo se relaciona con la operatividad de los derechos consagrados constitucionalmente y, por otra parte, es reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema que en casos de duda ha de estarse por la tesis favorable a la garantía constitucional de la defensa en juicio (C.S. Fallos: 246:86; 200:180; 235:548 y 248:189 entre muchos otros)".

En el mismo sentido, en la resolución del 6 de Octubre del 2000 en la causa "Simón Julio y otros s/sustracción de un menor", el Juez Gabriel Cavallo aceptó como parte querellante al CELS por cuanto "cuestiones atinentes a la afectación de los derechos humanos y la dignidad humana, lleva[n] aparejado la afectación a intereses ciertamente 'difusos', en el sentido de que queda en cabeza de un sujeto indefinido, precisamente por la indeterminación misma que conlleva el concepto 'grupo' o 'comunidad'. Y ese interés difuso en la reparación de una expectativa defraudada particularmente se centra en este caso en las distintas organizaciones de derechos humanos como el CELS. La representatividad de esta institución respecto de los derechos humanos es incuestionable, tal como lo refleja el estatuto de 1061/1068; y sin perjuicio de que con esto no quiero afirmar que es la única institución que podría considerarse como tal, resulta evidente que el CELS está perfectamente habilitada para asumir este rol sin cuestionamientos visibles ... en la defensa de intereses colectivos. Por consiguiente... habré de aceptar la petición del Sr. Horacio Verbitsky (como presidente del CELS), teniendo a esta institución como parte querellante".

Puede citarse también el precedente registrado en la causa "Cabezas, José Luis s/homicidio en General Madariaga"¹, en la que la Cámara de Apelaciones de Dolores aceptó la participación de la *Asociación de Reporteros Gráficos* como particulares damnificados en la causa en que se investigaba, precisamente, la muerte de un reportero gráfico, hecho en el que la condición de reportero había sido, en principio, una de las causas del asesinato.

En el voto del juez Begué se sostiene que:

"(...) Es sabido que la moderna doctrina, amplía las condiciones y circunstancias que tornan posible que una persona física o ideal, sea reconocida como particular damnificado.- Además de todos aquellos intereses, directos concretos y actuales legalmente protegidos por la norma reparatoria, se ha entendido que el instituto protege, los de aquellos individuos no siempre precisamente determinados, pero que forman parte de un grupo, clase, asociación agrupados en razón de una actividad, beneficio o goce de un bien común.- De tal forma que la lesión o

¹ Causa n° 56.456 del registro del Juzgado de Instrucción n° 3 de la ciudad de Dolores, Buenos Aires, resolución fallada el 18 de septiembre de 1998.

desconocimiento de alguno de éstos, afecte o ponga en peligro, el ejercicio goce de una labor profesional o de un interés de que usufructúa el conjunto de individuos.- En este caso, la entidad que los agrupa y que tiene por objeto el desarrollo y defensa de esa actividad o goce del interés común, aparece como quien resulta más razonablemente facultada para reclamar el carácter de particular damnificado",

La regla del artículo 43 ha sido una valiosa opción del constituyente pues respecto de ciertos grupos especialmente vulnerables es indispensable la actuación de terceros no afectados para garantizar el efectivo control jurisdiccional. Son numerosos los ejemplos en los cuales la víctima de una violación a un derecho constitucional ve seriamente comprometida su posibilidad de ocurrir ante la justicia y frente a ello no puede haber dudas acerca de la necesidad de superar un concepto de legitimación activa restringido al interés individual. Piénsese en los supuestos en los cuales la sola denuncia compromete la situación del afectado (v. gr. en los casos de violencia doméstica), cuando por los escasos recursos materiales es sumamente dificultoso que el damnificado accione (por ejemplo, si en los supuestos de extrema indigencia) o cuando se carece de un mínimo de capacidad que haga sencillo el acceder a los tribunales (tal el caso de las personas que no saben leer y escribir). Algo similar ocurre con relación a la justiciabilidad de intereses que adquieren importancia al ser concebidos de modo agregado o plural o que pueden conseguir una mejor solución de esa forma. Es claro, en fin, que la solución constitucional que establece la aptitud procesal de ciertas asociaciones en la defensa de intereses difusos expande las posibilidades de acceso a la justicia para los afectados en situación de vulnerabilidad y abre el camino hacia una protección más robusta de la jurisdicción constitucional.

El conjunto de las personas privadas de su libertad, en particular, resulta un colectivo especialmente vulnerable que reúne todas las notas antes descritas. La fuerte restricción de su libertad ambulatoria, la sujeción a controles estatales intensos y la obligada cohabitación hacen que algunas afectaciones inexorablemente comprometan el ejercicio de derechos de todo el grupo como tal y que el acceso a los recursos judiciales disponibles sea dificultoso. El ejemplo más claro de este problema es la superpoblación. Evidentemente, todos los alojados en condiciones de hacinamiento padecen una fuerte restricción en sus derechos pero sólo una solución general puede satisfacer el interés de cada uno y de todos. Con relación a las dificultades que los detenidos tienen para hacer valer sus derechos, basta con señalar que la sola presentación de un escrito de denuncia depende en buena medida de la actividad del órgano de custodia, lo que obsta al derecho a la jurisdicción cuando la autoridad denunciada es la misma que debe dar trámite a la acción. Todo ello conduce sin hesitación a la necesidad de que asociaciones como el CELS

deban ser parte en las acciones constitucionales que los involucran, tal como el constituyente lo ha establecido en el artículo 43 CN.

La interpretación amplia y favorable a la participación de diversos sectores externos a la administración estatal en general y penitenciaria en particular para el control y supervisión de las condiciones de encierro es además una solución propiciada en doctrina y receptada en los instrumentos internacionales.

La regla 55 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos es favorable a la participación de grupos ajenos a la administración del servicio de custodia en el control de la situación de los detenidos y declara que “Inspectores calificados y experimentados, designados por una autoridad competente, inspeccionarán regularmente los establecimientos y servicios penitenciarios. Velarán en particular por que estos establecimientos se administren conforme a las leyes y los reglamentos en vigor y con la finalidad de alcanzar los objetivos de los servicios penitenciarios y correccionales”.

En el mismo sentido ha sido afirmado por responsables de la propia administración penitenciaria que el permitir a los representantes de la comunidad ingresar a las prisiones y verificar que la administración obedece sus propias reglas asegura “... que los presos no sientan que están siendo ignorados por la comunidad... [y] puede ser una salvaguarda muy útil para que el personal penitenciario se prevenga de acusaciones infundadas en su contra” (cfr. Coyle, Andrew, La superpoblación en las prisiones: la prisión y la comunidad”, en AAVV, Justicia Penal y sobrepoblación penitenciaria, Elías Carranza (coordinador); ILANUD, Naciones Unidas y Siglo XXI, 1ra. ed., México, 2001; pág. 124).

V- HECHOS:

a) Superpoblación y malas condiciones de detención en comisarías

La superpoblación y el consecuente hacinamiento en que todas las personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires viven es bien conocida por todos.

Las 340 comisarías que funcionan en territorio provincial poseen una capacidad para 3178 personas, pero alojan 6364 y la situación se agrava notablemente en las seccionales del conurbano, donde hay 5080 detenidos en celdas con sólo 2068 plazas. Tal es la información con que cuenta el Sr. Defensor ante el Tribunal de Casación provincial, Mario Coriolano y que

fue difundida por la prensa días atrás (cfr. Diario La Nación, 4/10/01, edición digital). Los calabozos se encuentran en un estado deplorable de conservación e higiene; carecen por lo general de ventilación y luz natural. La humedad y, en verano, el calor son agobiantes. No cuentan con ningún tipo de mobiliario, por lo que toda actividad (comer, dormir, etc.) que desarrollan los internos debe llevarse a cabo en el piso. Los sanitarios no son suficientes para todos y no se garantiza la alimentación adecuada de los reclusos. El riesgo de propagación de enfermedades infecto-contagiosas es, sin dudas, mucho mayor y el aumento de casos de violencia física y sexual entre los propios internos es más que significativo.

En las cárceles, la situación no es mejor. Según un informe elaborado por la Secretaría de Asuntos Penitenciario y Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, a mediados del año pasado, había en las cárceles provinciales un 129% de superpoblación (cfr. CELS, Informe Anual, Hechos 2000-Argentina 2001; Capítulo VI: Situación carcelaria: hacinamiento, violencia e indefensión; Siglo XXI, Buenos Aires, 2001, pág. 204). Tal situación compromete lamentablemente los derechos básicos de una enorme porción del colectivo de 23.000 detenidos que se alojan hoy en cárceles bonaerenses (cfr. diario La Nación, 8/10/01, Sección Enfoques).

Incluso el propio Poder Ejecutivo Provincial declaró, mediante el Decreto nº 1.132 del 16 de mayo del corriente, "la emergencia físico funcional del Sistema Penitenciario de la provincia de Buenos Aires", reconociendo en sus considerandos que con la derogación del sistema del "dos por uno" y las modificaciones introducidas al Código de Procedimiento Penal en punto al régimen de excarcelaciones la población carcelaria se ha incrementado notoriamente. El Poder Ejecutivo también afirmó "Que han resultado insuficientes los cursos de acción ordinarios en la materia debido al actual estado en que se encuentran la infraestructura edilicia y de servicio de las Unidades y establecimientos que alojan internos, como así también el grado de superpoblación carcelaria que supera la capacidad de alojamiento de los mismos, circunstancias que deterioran notablemente razonables niveles de seguridad" (Considerandos, párr. 4to.)

Las manifestaciones de las autoridades políticas sobre el problema acrecientan la preocupación: "Sólo cabe anunciar a los criminales que no vengán a la provincia de Buenos Aires a cometer delitos porque irán presos y estarán incómodos", dijo el ex ministro de Justicia bonaerense, Jorge Casanovas ante una consulta sobre la crítica situación provocada por la superpoblación en las comisarías de la provincia, según se reflejó en aquel diario el 4 de octubre último. El ex ministro, conforme la prensa, habría explicado que la provincia había diseñado un plan para resolver la superpoblación en cárceles y comisarías que consistía en la construcción de 8 cárceles, 6 alcaldías y 3 centros de detención con una capacidad para 12 mil detenidos en total, pero el plan, sin embargo, fracasó rotundamente.

Según lo informado por la Defensoría de Casación de la Suprema Corte, en lo que va del año fueron clausuradas 18 dependencias policiales del conurbano en las que la Justicia había comprobado un agravamiento en las condiciones de detención, además de severos problemas de riesgo físico para los detenidos y hasta para los propios policías. Entre enero y septiembre del 2001 fueron cerradas las comisarías de General Conesa, General Guido, General Lavalle, 5a. de Lomas de Zamora, 2a. de Morón, 1a. de Merlo, 1a. de Mar del Plata, 1a. de Azul, 1a. y 7a. de La Plata, 1a. y 7a. de Zárate-Campana, y siete seccionales de San Isidro (cfr. Diario La Nación, 4/10/01, edición digital).

Evidentemente, la situación es gravísima y generalizada. El hacinamiento es la nota distintiva de las comisarías bonaerenses y es urgente ofrecer una solución a un problema que parece tender a crecer.

b) Detención ilegítima de personas en comisarías

La situación descrita en el punto anterior, además, señala abiertamente que muchas personas permanecen en comisarías a pesar de que la constitución y la ley prevén su alojamiento en centros especializados.

Un grupo importantísimo está conformado por las personas detenidas en comisarías, a pesar de haber vencido el lapso al que la ley condiciona tal alojamiento excepcional. En la mayoría de estos casos se ha dispuesto judicialmente el traslado de los detenidos a unidades carcelarias del Servicio Penitenciario, pero esta directiva se ve frustrada por no haber cupo suficiente para recibirlos.

Por otra parte, entre la población privada de su libertad en comisarías se encuentran aproximadamente ciento cuarenta adolescentes que, en palabras de la propia Corte provincial, “... sufren en tales ámbitos una restricción a su libertad sin recibir el debido tratamiento, limitación que en ocasiones lleva meses a la espera del traslado al correspondiente establecimiento especializado” (SCJBA, Acuerdo del 24 de octubre de 2001, sin destacado).

La propia justicia ha reconocido pues, que el aberrante estigma de los calabozos bonaerenses ni siquiera discrimina a quienes el Estado debe especial tutela y consideración.

Ni las comisarías se encuentran en condiciones edilicias de mantener prolongadamente en ellas a personas detenidas, ni el personal policial está capacitado para sobrellevar esta situación, especialmente con relación a los adolescentes privados de su libertad. Todo ello viola de manera flagrante los más elementales derechos individuales de los reclusos, tal

como lo informó el Comisario Mayor Don Carmelo Impari, entonces Jefe de la Policía Departamental Atlántica Centro, en la oportunidad de prestar testimonio ante el Tribunal en lo Criminal nº 3 de Mar del Plata, causa 692, caratulada “Unidad Fiscal de Juicio c/Gob. Pcia. de Bs. As. s/ Amparo”).

Así también se incrementan considerablemente situaciones de riesgo como la posibilidad de transmisión de enfermedades, los motines, las fugas, las tomas de rehenes y otras situaciones de violencia de las cuales resultan víctimas tanto los detenidos como el personal asignado a la custodia y los vecinos del lugar. Resulta al respecto por demás ilustrativo el informe producido por la Jefatura Departamental de San Isidro, con fecha 26/9/01, que se acompaña a la presente como prueba documental.

Por último, esto produce una afectación indebida de recursos materiales y humanos que, en cambio, deben estar destinados a las funciones que legalmente debe cumplir la policía de seguridad, conforme la ley provincial 12.155 (Fallo del Tribunal en lo Criminal nº 3, de Mar del Plata, en autos “Unidad Fiscal de Juicio c/Gob. Pcia. de Bs. As. s/ Amparo”, de fecha 2/5/01). Gran cantidad de personal policial se encuentra afectado a la custodia y traslado de detenidos, siendo considerable la merma operativa que esto provoca en tareas de prevención de delitos. Esta circunstancia trae aparejado un grave perjuicio en materia de seguridad ciudadana.

VI- DERECHO:

a) Derecho a condiciones dignas de alojamiento.

I

La Constitución Nacional establece que *“...las cárceles de la Nación, serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas...”* y en igual sentido se erigen las normas de los documentos internacionales con jerarquía constitucional que proscriben todo trato o pena cruel, inhumano o degradante (cfr. CN, arts. 18 y 75, inc. 22; Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 5to.; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, arts. XXV, in fine, y XXVI; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 10, inc. 1ro.; Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 5, inc. 2do.).

También la Constitución Provincial dispone que *“Las prisiones son hechas para seguridad y no para mortificación de los detenidos”* y que *“Todo rigor innecesario hace responsables a las autoridades que lo ejerzan”* (art. 30), a la vez que concede a todas las personas el derecho *“Al respeto de la dignidad, al honor la integridad física, psíquica y moral”* (art. 12 inc.3),

asegura que los habitantes “*Gozan de los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional, los que emanan en su consecuencia a través de los tratados celebrados por la Nación y los que se expresan en esta Constitución*” (art. 11) y establece que “*Toda ley decreto u orden contrarios a los artículos precedentes o que impongan al ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en ellos otras restricciones que las que los mismos artículos permiten o priven a los ciudadanos de las garantías que aseguran, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los jueces...*”, haciendo responsables a los funcionarios y empleados que la hayan autorizado o ejecutado (art. 57).

En el ámbito de la provincia de Buenos Aires “la asistencia de los procesados y el tratamiento y/o asistencia de los condenados a penas privativas o restrictivas de la libertad” son regidos por la Ley de Ejecución Penal Bonaerense, nro. 12.256.

Esta norma, al igual que las anteriores citadas, también establece, en términos generales, el tratamiento humano y digno que debe darse a los detenidos cuando señala que es “*fin último*” de las medidas que regula “*la adecuada inserción social de los procesados y condenados a través de la asistencia o tratamiento y control*”, institutos éstos que, en la inteligencia legal, están “*dirigidos al fortalecimiento de la dignidad humana y el estímulo de actitudes solidarias inherentes a su condición de ser social, a partir de la satisfacción de sus necesidades y del desarrollo de sus potencialidades individuales*” (art. 4).

Según la ley, los programas de asistencia o tratamiento deben dirigirse “*a reducir las diferencias que puedan existir entre la vida en prisión y la vida en libertad, tendiéndose a preservar o reforzar la continuidad de los vínculos familiares, educacionales y laborales*” (arts. 8 y arts. 5, 6, 67 y 94).

En el artículo 9 se establecen los “*derechos básicos*” de las personas privadas de su libertad. Entre ellos, se asegura:

- 1) *Atención y tratamiento integral para la salud.*
- 2) *Convivencia en un medio que satisfaga condiciones de salubridad e higiene.*
- 3) *Vestimenta apropiada que no deberá ser en modo alguno degradante o humillante.*
- 4) *Alimentación ...cuantitativa y cualitativamente... suficiente para el mantenimiento de la salud.*
- 5) *Comunicación con el exterior....*
- 6) *Educación, trabajo, descanso y goce del tiempo libre...*”.

La Sala IIIa. de la Cámara de Apelación y Garantías del Depto. Judicial de San Isidro (“Cuaderno de vida penitenciaria de Diego Gastón Acevedo”, expediente nro. 14.450, rta. 31 de mayo de 2002) estableció la necesidad de definir cuáles eran las características que, concretamente, debía reunir un lugar de alojamiento para que pudiese ser considerado “digno” en los términos que la normativa internacional, constitucional y legal reclama.

Como señaló ese tribunal, cuyas líneas fundamentales seguimos en lo sucesivo, la redacción de las normas referidas no reclama una exégesis compleja: el poder coercitivo del Estado que se manifiesta a través del encierro sólo puede desplegarse de un modo acorde con el respeto debido a cada individuo, por su sola condición de sujeto de derechos, y esto quiere decir que entre todos los límites que el Estado debe respetar en el ejercicio de su poder punitivo existe un conjunto de prescripciones específicamente vinculadas con las condiciones materiales que deben garantizarse para el encarcelamiento de una persona. Este universo de deberes estatales se encuentra expresado, de modo genérico, bajo fórmulas esencialmente idénticas tales como la proscripción de tratos crueles, inhumanos o degradantes, el reconocimiento explícito de la dignidad del sujeto privado de su libertad, o la disposición de establecimientos sanos y limpios, cláusulas cuyo respeto no admite discusión alguna en un Estado democrático de derecho.

En muchos supuestos, la subsunción de una situación dada en alguna de las categorías antes citadas resulta manifiesta. Sin embargo, cláusulas como “trato digno”, “humanidad de los castigos”, “medio saludable” y otras similares, resultan insuficientes en su mera redacción para resolver casos matizados. En las normas referidas no existe una descripción detallada de los indicadores esenciales que configuran el conjunto de condiciones mínimas aceptables, ni tampoco, como sostiene Eugenio Freixas respecto de la ley nacional 24.660, “los mecanismos... que resulten aplicables en el caso que se vulnere la prohibición” (conf. “Observaciones sobre la nueva Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad”; en Jornadas sobre Sistema Penitenciario y Derechos Humanos, del Puerto, Bs. As., pág. 203).

Ello hace indispensable la precisión de ciertos estándares para conocer, en cada caso, las circunstancias fácticas relevantes para su adecuada subsunción, y hacer posible un pronunciamiento jurisdiccional acerca de la infracción de un deber jurídico y la consecuente determinación de su sanción. La tarea de interpretación de la normativa referida es imprescindible entonces, a fin de determinar si las características del encierro en examen se adecuan a los estándares mínimos así elaborados.

En definitiva, se trata de definir qué características debe tener un lugar de encierro para que el encarcelamiento de una persona allí pueda considerarse digno. Y la respuesta normativa a este interrogante es la

primera cuestión que debe satisfacerse pues sólo sobre tal base podrá desplegarse la debida actividad jurisdiccional.

II

Las normas con base en las cuales se puede establecer el conjunto de condiciones que debe reunir un alojamiento digno son numerosas y de diversa jerarquía. Junto a las disposiciones de La Ley de Ejecución Penal Bonaerense ya citada, se erigen otros instrumentos sobre la base de los cuales es correcto fundar la construcción del estándar mínimo exigido. Estas regulaciones relativas a la situación de las personas privadas de su libertad permiten dirigir la actividad jurisdiccional hacia la definición del contenido concreto de la obligación estatal.

Las “Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos” de las Naciones Unidas, preparadas por la Comisión Internacional Penal y Penitenciaria, aprobadas en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955 y ampliadas en 1977 y 1984, ofrecen un aporte relevante. Es compartido por todos, y en este sentido la utilización de ese cuerpo normativo es eficiente aquí, que las Reglas Mínimas deben servir de guía en la aplicación del derecho interno, con valor de pauta interpretativa. Las “Reglas” de Naciones Unidas reflejan el consenso de la comunidad internacional acerca de las condiciones adecuadas mínimas admitidas para el encarcelamiento de una persona y, en consecuencia, las disposiciones allí contenidas, poseen valor preeminente para la determinación del alcance de las normas de derecho en juego.

En el ámbito reglamentario, existen algunas pautas contenidas en el “Reglamento de detenidos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires” que poseen valor prescriptivo respecto de la situación de las comisarías y que también son operativas respecto del encierro carcelario, pues, aunque dirigidas a regular las condiciones en que deben desarrollarse los encarcelamientos policiales, de suyo transitorios, deben ser entendidas, a su vez, como un mínimo imposible de transgredir por cualquier otro tipo de encierro esencialmente más gravoso, tal como el carcelario que, por su duración más prolongada, intensifica el efecto desocializador propio de cualquier privación de la libertad.

También poseen un alto valor orientador las exigencias contenidas en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, nro. 24.660, emanada del congreso federal, dado que establece regulaciones específicas sobre aspectos similares a los que aquí se examinan. Por último, pueden citarse también las normas establecidas por distintas asociaciones correccionalistas

Todas las disposiciones referidas señalan aspectos diversos del encarcelamiento, aunque no existe uniformidad absoluta en la selección de los criterios que deben considerarse relevantes para la elaboración del estándar. Con todo, es posible agrupar las regulaciones en torno a ciertas exigencias que, por su recurrente mención en estos instrumentos, pueden considerarse indicadores aceptados sobre la base de un muy amplio consenso. Estas exigencias, en ocasiones han sido receptadas por la legislación y en muchas otras configuran valores, hoy por hoy indiscutibles, dentro de la comunidad científica y técnica ocupada de la atención de las personas privadas de su libertad.

Con base en todo ello, deben establecerse los requisitos referidos legalmente y que integran el “trato digno” que debe darse a los detenidos. De esta convergencia surgirán cuáles son las condiciones mínimas impuestas al Estado en materia de alojamiento de personas detenidas. Sin esta determinación previa, como se dijo queda comprometido el derecho a la jurisdicción.

III

La desobediencia de cualquiera de las pautas mínimas que reglamentan el alojamiento, conforma una presunción muy firme, difícil de derrotar, acerca de la ilegitimidad del encierro y en este sentido deben utilizarse los estándares respecto de los distintos aspectos relevantes acerca del trato debido a las personas detenidas.

En general, respecto de todas las definiciones que hacen a las condiciones de encierro, siempre está presente el problema acerca de la indeterminación de la sanción que corresponde al incumplimiento. Sin embargo, la afirmación acerca de la conveniencia de adoptar una u otra medida, tiene por fin prescribir su ulterior observación y no puede tener otro sentido más que el de su observación el establecimiento de una pauta normativa.

La circunstancia de que en ocasiones, aun por vía de la legislación formal, se haya admitido la posibilidad de eludir la observación de las pautas bajo ciertas circunstancias, refirma esta conclusión.

En Gran Bretaña, por ejemplo, los certificados relativos a la capacidad de alojamiento expedidos por el secretario de Estado antes del uso de una celda cuentan con dos valores: uno correspondiente a la capacidad admitida en momentos normales y otro a la correspondiente a los de sobrepoblación (Cf. Livingston y Owen, *Prison Law, Text & materials*, Clarendon Press, Oxford, 1995, p. 104, citado por Marcos Gabriel Salt, “Derecho de Ejecución Penal”, en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal n° 4 y 5, p. 1068, nota 61).

Lo relevante es que siempre existe (o resulta posible construir) un límite a la capacidad de un penal que no puede superarse sin dejar de observar alguna o varias de las razones que condujeron a su determinación anterior al momento de sobre-alojamiento. Ello así pues, en la determinación del valor que se estipula en cada caso, son atendidos diferentes aspectos que van desde la seguridad de los internos y del personal penitenciario, o su higiene o intimidad, hasta cuestiones presupuestarias. Y sencillamente, si un número de cupos fue fijado en orden a preservar esos intereses es imposible que su transgresión pueda verificarse sin que, en principio, también se presente una lesión concurrente de aquellos otros bienes.

Los expertos de Penal Reform Internacional adviertan al comentar la Regla Mínima 10 de las Naciones Unidas arriba citada *“que, en casos graves de sobrepoblación, las autoridades administrativas y penitenciarias deberán elaborar un plan para que los internos pasen la mayor cantidad de tiempo posible fuera de las celdas para reducir los efectos nocivos de la sobrepoblación”* (cit. por Salt, op. cit. p. 1068, nota 62, sin destacado).

Esto puede sugerir que para algunas opiniones, aunque excepcional, la infracción de una regla de alojamiento es una variable que no hace ilegítimo el encarcelamiento de un individuo. Sin embargo, es incorrecto plantear el problema en estos términos. No es cierto que el encarcelamiento pueda desarrollarse de cualquier modo, existen deberes específicos del Estado en tal sentido y es interés del propio Estado respetar esos límites mínimos.

De tal forma, no existen excepciones al estándar mínimo que posean una entidad tal que llanamente conduzca al establecimiento de un baremo inferior a aquél definido “ex ante”. Establecidos los estándares de habitación, infringe la norma cualquier encierro que no los respete, a menos que se presente una compensación relevante que asegure de igual modo los intereses que las normas relativas a la condición del alojamiento protegen.

En esta línea, la Corte Suprema de los Estados Unidos luego de comprobar en el caso *Rhodes vs. Chapman* (1981) que a pesar de la superación de la cantidad de internos admisible existía un servicio de comida adecuado, ventilación suficiente y espacios apropiados para esparcimiento, visitas y estudio, afirmó que la superpoblación no implica necesariamente la violación a la VIII enmienda si no se verifican en el caso concreto los efectos perjudiciales que generen condiciones de vida por debajo de los límites mínimos admitidos.

Con todo, las hipótesis de compensación deben ser tratadas de manera muy cauta. La determinación de las condiciones de alojamiento de un interno es fruto de una serie de elaboraciones que comprenden ya la consideración de la higiene, seguridad e intimidad necesarias para la vida

digna de una persona y a poco que se reflexione sobre ello queda claro que, si bien teóricamente es posible pronunciarse como lo hizo la Corte norteamericana, es en extremo improbable que en los hechos pueda existir una compensación eficaz que consista en algo distinto a restablecer los niveles mínimos admitido por las reglas.

Ello así pues una vez verificada la infracción, cualquiera de las elaboraciones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias relativas a la posibilidad de hacer excepción a los límites mínimos, sólo puede resultar razonable si está sostenida por una justificación independiente, lo que nunca ocurrirá sobre la base de que, de todas formas, las condiciones todavía son apropiadas. En ese caso, sólo se estará diciendo que el estándar mínimo puede infringirse sin ofrecerse más razones para ello que las mismas que legitimaron el establecimiento de la regla original. La nuda afirmación de que una infracción a las reglas mínimas es admisible en razón de que está permitida para casos de excepción, conforma una mera petición de principios inválida para demostrar la verdad de la conclusión.

Los supuestos habilitantes para infringir las condiciones mínimas que fija la CN pueden ser varios pero sólo fundados en buenas razones independientes. Por ejemplo, si resultare imperioso alojar durante un día, en un lugar reducido, a los internos de un sector a fin de paliar las consecuencias de un accidente ocurrido en el pabellón que ocupaban. En tal caso, evidentemente se verifica la infracción a la norma que prohíbe el hacinamiento, pero su lesión estaría admitida por el derecho frente al permiso concurrente para rescatar a los heridos del sector dañado.

Las excepciones al cumplimiento de las reglas mínimas de alojamiento sólo pueden ser atendidas si están restringidas temporal, espacial y materialmente y si, -y sólo si-, existe una posibilidad de contralor acerca de la presencia del supuesto permisivo. El mero interés social en el cumplimiento de las medidas coercitivas no es uno de estos supuestos.

La responsabilidad penal o el peligro procesal sólo justifican la procedencia de la pena de prisión o del encierro cautelar, bajo determinadas condiciones. Si éstas no están reunidas, no puede concluirse que el permiso opere por la sola existencia del título que ordena legítimamente la prisión. La antinormatividad del encierro en condiciones degradantes no se ve enervada por la presencia de ningún supuesto de excepción cuando sólo concurren las mismas razones que legitimaron el pronunciamiento restrictivo de la libertad.

Además, tal como ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación “... las carencias presupuestarias, aunque dignas de ser tenidas en cuenta, no pueden justificar transgresiones de este tipo. Privilegiarlas sería tanto como subvertir el Estado de Derecho y dejar de cumplir los principios de la Constitución y los convenios internacionales que comprometen a la Nación

frente a la comunidad jurídica internacional...” (cfr. CSJN, in re “Badín, Rubén y otros c/Pcia. de Buenos Aires, rta. 19 de octubre de 1995; LL, 16/7/96”).

Coincidentemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “[e]n los términos del artículo 5.2 de la Convención [Americana sobre Derechos Humanos] toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos” (Corte IDH, caso Neira Alegría y otros, sentencia del 19 de enero de 1995, párr. 60)

Luego, sólo la eficaz compensación de los efectos nocivos del hacinamiento permite afirmar que la infracción a las reglas de cupo máximo no se verifica. Cuando tal compensación no concurre, sólo buenas razones independientes pueden hacer admisible tolerar excepcionalmente la inobservancia de los valores mínimos fijados para la capacidad de alojamiento.

Por ello, infracción a los deberes que se describen más bajo alertan ostensiblemente acerca de la ilegitimidad del encierro. Y es deber del Estado demostrar de qué modo ha compensado los efectos nocivos de su incumplimiento. De lo contrario debe hacer cesar la situación.

IV

Los estándares que la Cámara Penal de San Isidro fijó en la resolución citada son tomados aquí pues constituyen un antecedente muy preciso de una cámara de apelación y garantías de la provincia, sin perjuicio de que resulten posibles otras construcciones. Con base en ellos, entendemos que los lugares de alojamiento deben respetar las siguientes reglas.

1. Superficie y cubaje mínimos por interno.

Una de las manifestaciones más claras del encarcelamiento ilegítimo de una persona consiste en su confinamiento en lugares de dimensiones reducidas. A fin de evitar estas situaciones, la legislación y las regulaciones suelen hacer referencia a la cantidad máxima de internos admisible en un establecimiento o al volumen y superficie con que debe contar cada lugar de alojamiento.

En el ámbito provincial, la ley 12.256 guarda silencio respecto de la asignación de dimensiones concretas a los lugares de encierro, aunque la cuestión aparece regulada respecto de la detención en comisarías por el

artículo 26 del Reglamento de detenidos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que establece que *"Los calabozos a que hace referencia esta Reglamentación deberán poseer las siguientes condiciones mínimas de construcción y seguridad:*

- a) *Celdas individuales: 2,80 mts. de largo por 2,00 mts. de ancho por 2,50 mts. de alto...*
- b) *celdas comunes: 4,80 mts. de largo por 4,80 mts. de ancho por 2,50 mts. de alto...*

Las "Reglas Mínimas" de Naciones Unidas no prescriben medidas mínimas exigibles aunque indican que:

"10. Los locales destinados a los reclusos, y especialmente aquellos que se destinan al alojamiento de los reclusos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias mínimas de higiene, habida cuenta el clima, particularmente en lo que concierne al volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación".

Para el ámbito nacional, el artículo 59 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, ley 24.660, establece que *"El número de internos de cada establecimiento deberá estar preestablecido y no se lo excederá a fin de asegurar un adecuado alojamiento. Todos los locales estarán siempre en buen estado de conservación. Su[s]... dimensiones guardarán relación con su destino y los factores climáticos".*

Resulta especialmente orientadora también la información contenida en la Resolución 12/99 del Defensor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Víctor E. Hortel.

Allí se señalan, por ejemplo, los estándares de la Asociación Correccional Americana (ACA), una institución no gubernamental que se ocupa de la certificación de servicios de prestadores privados y estatales en materia de alojamiento penitenciario. Esta institución ha redactado varios manuales de procedimiento que, en el caso de adultos *"... señalan que cada prisionero contará con 10,66m (35 pies) de espacio libre. Si permanecen recluidos por períodos superiores a 10 horas diarias, deberán contar con por lo menos 24,38 m² (80 pies cuadrados) en total, incluyendo los muebles y elementos fijos (Norma 3-4128) (conf. Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires, Res. cit.). Instituciones como el Federal Boureau of Prisons (Servicio Penitenciario Federal de los EEUU) refiere en sus resoluciones permanentemente a los estándares de la ACA.*

El Sr. Defensor señaló también *"Que en el mismo sentido la Asociación Americana de Salud Pública ha publicado normas carcelarias para todas las áreas que afectan la salud de los prisioneros ('Standars for Health Services in Correctional Institutions', segunda edición) [que] establecen un espacio de por lo menos 18,28 m² (60 pies cuadrados) con por lo menos*

2,43m (8 pies) de altura en el caso de celdas individuales, y 21,33 m² (70 pies cuadrados) para reclusos que permanecen allí más de 10 horas diarias. [Conforme con los parámetros de esa institución,] se prefiere el alojamiento individual, pero si esto no fuera posible y se colocaran dos ocupantes, corresponde duplicar el espacio. No se recomienda el alojamiento grupal, pero en caso de ser utilizado, debe contarse con 18,28m² (60 pies cuadrados) de espacio por recluso...”

También desde otro enfoque internacional, “conforme surge del 'Rapport annuel d'activité 1994', publicado en Francia por la Dirección de la Administración Penitenciaria (Servicio de la Comunicación, de Estudios y de Relaciones Internacionales), la superficie necesaria por interno a los fines de su alojamiento se calcula siguiendo una tabla de donde surge la superficie y la cantidad de personas a que corresponde la misma. Este indicador comienza con una superficie mínima de 11 m² correspondiente a una persona; de 12 a 14 m² a dos personas; de 15 a 19 m² a tres personas; de 20 a 24 m² a cuatro personas; de 25 a 29 m² a cinco personas; de 30 a 34 m² a seis personas; de 35 a 39 m² a siete personas; de 40 a 44 m² a ocho personas; de 45 a 49 m² a nueve personas; de 50 a 54 m² a diez personas; de 55 a 64 m² a doce personas; de 65 a 74 m² a catorce personas; de 75 a 84 m² a dieciséis personas y de 85 a 94 m² a dieciocho personas” (conf. Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires, Res. cit.).

Por último, en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, el Pliego de Licitación para la Construcción del Complejo Penitenciario III, de la Secretaría de Política Penitenciaria y de Readaptación Social del Ministerio de Justicia de la Nación, también citado por el Defensor General, establece las características comunes a las celdas correspondientes a estos establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (Sección II, págs. 110/112): “entre los requerimientos de la propuesta técnica, se estipula que la celda constituye el espacio personal del interno, proveyendo de esta forma privacidad para sí y seguridad a sus pertenencias. El mobiliario podrá considerar cierto grado de personalización de su lugar. Todas las celdas serán individuales. Tendrán una superficie neta mínima de 8 m², con un lado menor de 2,20m y 2,50m de altura. El equipamiento será dispuesto de tal forma que deje un espacio libre de ocupación de 3,5 m² y permita un desplazamiento en línea recta de 3,20 m. Estas dimensiones serán consideradas como mínimas (conf. Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires, Res. cit.).

Como es fácil advertir, los criterios son dispares aunque resulta claro que la indicación de una superficie y de un volumen mínimos admisibles por interno resulta un parámetro necesario para la determinación de las condiciones que ha de tener una celda.

Resta entonces precisar qué parámetro es el mínimo tolerado por el derecho a fin de efectuar a su respecto las consideraciones expresadas en punto al espacio mínimo que debe asegurarse a cada interno. Sobre la base de las normas y regulaciones referidas puede concluirse que los lugares de alojamiento deben al menos contar con 5m² por interno alojado en él, y que, en aquellos casos en los que la persona privada de su libertad debe permanecer por más de diez horas diarias en su celda, el espacio mínimo con que debe contar es de 8m², de superficie, en ambos casos, en un ámbito con una altura superior a los 2,50m.

2. Aireación.

Otro de los requisitos imprescindibles para afirmar la adecuación legal de un encarcelamiento, resulta la suficiente aireación del lugar de encierro.

El Reglamento de detenidos de la policía provincial, ya citado, expresa que

“Art. 26... d) Toda celda deberá asegurar luz solar y ventilación directa...”.

También el artículo 59 de la ley 24.660 citado, establece que la ventilación de los establecimientos penitenciarios guardará *“relación con su destino y los factores climáticos”* y las *“Reglas Mínimas”*, además del punto 10, ya citado, que:

11. “En todo local en que los reclusos tengan que vivir o trabajar: a) Las ventanas... deberán estar dispuestas de manera que pueda entrar aire fresco, haya o no ventilación artificial...”.

La Resolución del Defensor Oficial citada refiere a su vez *“Que en cuanto a las condiciones ambientales el pliego [para la licitación de un establecimiento federal] prevé una ventilación cruzada que asegure las condiciones de salubridad e higiene del ambiente, con una renovación de 0,5 m³ por minuto por ocupante...”.*

En función de ello debe exigirse, como condición mínima de habitabilidad que las celdas de alojamiento posean aireación directa, suficiente para renovar el aire cuyo oxígeno consume el interno alojado durante su estancia.

3. Iluminación.

También el aseguramiento de una iluminación mínima es condición aceptada sobre la base de un amplio consenso.

Las Reglas Mínimas disponen que *“11. En todo local en que los reclusos tengan que vivir o trabajar: a) Las ventanas tendrán que ser*

suficientemente grandes para que el recluso pueda leer y trabajar con luz natural... [y que] b) La luz artificial tendrá que ser suficiente para que el recluso pueda leer y trabajar sin perjuicio de su vista”.

El artículo 59 de la ley 24.660 citado, establece que la iluminación de los establecimientos penitenciarios guardará “*relación con su destino y los factores climáticos*” y el citado pliego de licitación correspondiente al establecimiento federal disponía también “*Que la iluminación artificial asegurará un nivel mínimo de 300 lux sobre el plano de escritura y la zona del lavatorio... [y que] ...El nivel general de iluminación de la celda será de 100 lux, mientras que la luz nocturna será de 30 lux. La iluminación natural será a través de una superficie con vista al exterior. Los vanos de las ventanas serán de bordes indeformables con una luz no mayor a 12,5 cm en uno de sus sentidos. La superficie vidriada no será inferior en ningún caso al 5% de la superficie de la celda*” (cfr. Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, Res. cit.)

Sobre esta base, debe existir en cada uno de los lugares de alojamiento la posibilidad de contar con luz natural directa y ésta debe permitir, al menos en algún sector del local, la escritura cómoda del detenido. Asimismo deben asegurarse al menos dieciséis horas de iluminación diaria suficiente.

4. Calefacción.

Tampoco puede discutirse la necesidad de asegurar una temperatura ambiente que permita el desarrollo normal de las actividades.

La ya citada Regla 10 del programa de Naciones Unidas dispone la debida calefacción de los locales y también el artículo 59 de la Ley 24.660 citado, entre otras disposiciones similares, establece que la calefacción de los establecimientos penitenciarios guardará “*relación con su destino y los factores climáticos*”.

Así las cosas, consideraremos también una condición mínima, sobre la base de las disposiciones referidas, que, para el territorio de la provincia, en atención a sus condiciones climáticas habituales se asegure mediante el debido calefaccionamiento una temperatura mínima de 10° C en los locales destinados al alojamiento de los internos.

5. Condiciones sanitarias.

La Regla 12 del programa de las Naciones Unidas establece que “*Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que cada recluso pueda satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente*”.

El artículo 60 de la ley 24.660 también establece que “... *Los establecimientos deberán disponer de suficientes y adecuadas instalaciones sanitarias y proveerán al interno de elementos indispensables para su higiene*” y todas las regulaciones antes referidas contienen prescripciones similares.

El contenido del deber es sencillo y en la tarea de establecer un patrón mínimo debe considerarse la utilización plural de los servicios sanitarios y las necesidades habituales de una persona adulta.

Por ello, debe existir al menos un sanitario por cada diez internos, en óptimas condiciones de higiene, como condición mínima de habitabilidad, con la posibilidad de acceso permanente a su uso por parte de los detenidos.

Según las “Reglas Mínimas”, “13. *Las instalaciones de baño y de ducha deberán ser adecuadas para que cada recluso pueda y sea requerido a tomar un baño o ducha a una temperatura adaptada al clima y con la frecuencia que lo requiera la higiene general según la estación y la región geográfica, pero por lo menos una vez por semana en clima templado*”. La regla 15, a su vez, afirma que los reclusos “... *dispondrán de agua y de los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza...*”.

Nuevamente, es manifiesto el fundamento de una exigencia en este sentido y debe exigirse, mínimamente, la existencia de una ducha con agua caliente de acuerdo a las necesidades del clima cada quince internos, por lo menos.

6. Cantidad de camas por interno.

La regla 15 de Naciones Unidas afirma que los reclusos “... *dispondrán de agua y de los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza*” y “... *en conformidad con los usos locales y nacionales, de una cama individual suficiente, mantenida convenientemente y mudada con regularidad a fin de asegurar su limpieza*”.

El pliego de licitación para un instituto federal ya referido establecía “*Que el equipamiento típico constará de una cama, una superficie para escritura con un plano próximo para sentarse, un lugar para guardar ordenadamente efectos personales y ropa. Las instalaciones sanitarias estarán compuestas por un lavatorio, una superficie espejada y un inodoro. Existirá una comunicación de dos vías (transmisión de voz en ambos sentidos) con el puesto del agente correccional. El diseño de las superficies de la celda y su equipamiento facilitarán la limpieza. Los colchones y almohada serán autoextinguibles*” (cfr. Defensoría General, Res. cit.)

En consecuencia, es claro el deber de que exista una cama por cada interno, aislada del suelo y con las dimensiones adecuadas al descanso apropiado de una persona detenida de acuerdo con sus necesidades.

7. Seguridad para el descanso.

Parece discutible que el alojamiento nocturno individual se encuentre ordenado, más allá de que todas las normas en examen tiendan a su establecimiento progresivo.

La Ley de Ejecución Penal Bonaerense ya citada, al regular el *régimen de procesados* dispone que éstos “deberán alojarse dentro de las posibilidades edilicias, en celdas individuales, debiéndose poner en conocimiento de la Jefatura del Servicio Penitenciario dicha circunstancia, si ello no pudiese ocurrir” (art. 74, sin destacado).

En sentido similar, establece respecto de los *condenados* ubicados en el *régimen semiabierto* que éstos “*dispondrán de alojamiento individual, pudiendo... alojarse en dormitorios colectivos que garanticen su privacidad*” (art. 135), mientras que los que revistan en el *régimen cerrado*, en sus modalidades moderada y severa, “*se alojarán en celdas individuales que permanecerán cerradas durante su tiempo de ocupación. Estarán dotadas del correspondiente módulo sanitario, cumpliendo con los requisitos de habitabilidad que prescriben las normas legales vigentes.*”, pudiendo “*en la forma moderada*” “*contemplarse la alternativa de dormitorios para pequeños grupos especialmente seleccionados.*” (art. 151). Disposiciones similares aparecen contenidas en los artículos 81, 82, 83 y 124 de la ley.

A su vez, las “Reglas Mínimas”, prescriben que

9.1 “Las celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser ocupados más que por un solo recluso. Si por razones especiales, tales como exceso temporal de población carcelaria, resultara indispensable que la administración penitenciaria central hiciera excepciones a esta regla, se deberá evitar que se alojen dos reclusos en cada celda o cuarto individual” [y que]

9.2 “*Cuando se recurra a dormitorios, éstos deberán ser ocupados por reclusos cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para ser alojados en estas condiciones...*”.

Así, aunque las normas no exigen de manera taxativa el alojamiento individual nocturno, sin perjuicio de la tendencia en ese sentido, es indispensable que el descanso diario esté garantizado de manera tal que pueda desarrollarse en un ámbito sereno y seguro.

8. Contacto diario con el aire libre, con posibilidad de desplazamiento.

La Regla 21 de Naciones Unidas establece que "1) *El recluso que no se ocupe en un trabajo en aire libre deberá disponer, si el tiempo lo permite, de una hora al día por lo menos de ejercicio físico adecuado al aire libre.* 2) *...recibirán durante el período reservado al ejercicio una educación física y recreativa. Para ello se pondrá a su disposición el terreno, las instalaciones y equipo necesario*".

En igual sentido es compartido este criterio por todas las regulaciones referidas por lo que debe verificarse esta efectiva posibilidad de acceso a espacios abiertos, con la consiguiente facultad de desplazarse a través de ellos, a fin de poder predicarse la legalidad de un encarcelamiento.

9. Posibilidad de acceder a un servicio médico.

El artículo 153 de la ley provincial dispone que "*Las necesidades referidas a las áreas de salud, higiene y alimentación de los internados serán cubiertas por el Servicio Penitenciario salvo excepciones debidamente fundadas, mediando la autorización de la Dirección de Sanidad*", razón por la cual, sin perjuicio del prestador competente para cada situación, sólo asegurando la posibilidad de contar con atención médica adecuada puede desarrollarse el encarcelamiento legítimo de una persona.

10. Posibilidad de acceder al sistema educativo.

Similares consideraciones trae la ley de ejecución provincial respecto de la posibilidad de acceder a un régimen de estudios apropiados, por lo cual deberá garantizarse, como condición mínima, el aseguramiento de la escolaridad obligatoria en el ámbito de reclusión (cfr. arts. 9.6, 31, 32, 33 y 87, ley 12.256).

11. Posibilidad de acceder a un trabajo.

Igual consideración merece la posibilidad de acceder a un trabajo durante el encarcelamiento (cfr. arts. 9.6, 34 a 39, 88 y 80, ley 12.256). Debe ofrecerse una tarea a cada persona privada de su libertad, afín a sus necesidades e intereses.

12. Adecuada alimentación.

Por último, el referido artículo 153 de la ley 12.256 establece que el servicio de alimentación será cubierto por el servicio penitenciario a fin de

satisfacer el derecho que asiste a los detenidos de recibir una dieta adecuada (arts. 9.4 y 76), normas en función de las cuales el Estado queda obligado a ofrecer una nutrición diaria suficiente a las personas privadas de su libertad.

En síntesis, el alojamiento legítimo de una persona, requiere como mínimo que se respeten las pautas referidas, esto es:

1. Superficie de 5 u 8 metros cuadrados como mínimo por cada interno alojado, según éste desarrolle actividades en otros lugares o deba permanecer en su celda por más de diez horas diarias. En ambos casos en un local de una altura mínima de 2,50m.
2. Aireación directa de los lugares de alojamiento que, en función del cubaje, resulte adecuada para renovar el oxígeno requerido para la normal respiración de los internos.
3. Iluminación suficiente durante al menos 16 horas diarias, con la posibilidad de contar durante algún lapso con luz natural directa. En algún sector del local de alojamiento la iluminación debe permitir la lectura cómoda del interno alojado.
4. Calefacción que asegure en el territorio de la provincia una temperatura de al menos 10° C en los locales destinados al alojamiento de los internos.
5. Instalación de al menos un sanitario por cada 10 internos alojados, con la posibilidad de acceso permanente a su utilización. Instalación de al menos una ducha con agua caliente de acuerdo a las necesidades del clima, por cada quince internos alojados.
6. Instalación de una cama por interno, adecuadamente aislada del suelo y con las dimensiones necesarias para el descanso apropiado del interno, con provisión de la correspondiente ropa de cama regularmente aseada.
7. Aseguramiento del descanso diario de cada interno en un lugar sereno y seguro.
8. Contacto diario de los internos con el aire libre, durante al menos una hora, con la posibilidad de desplazarse sobre los espacios abiertos.
9. Acceso a un servicio médico.
10. Acceso al sistema educativo obligatorio.

11. Posibilidad de acceso a un trabajo afín a las necesidades e intereses del interno.

12. Adecuada alimentación diaria.

b) Detención ilegítima de personas en comisarías

Como señalamos antes, además de la infracción a los deberes referidos a las condiciones de habitabilidad que debe reunir un lugar de encierro, en las comisarías bonaerenses se verifica una segunda infracción, pues se alojan en ellas a personas que deberían estar en centros preparados para tal fin y también ser custodiados por funcionarios especialmente formados para llevar a cabo esa tarea.

b1) Personas con situación procesal resuelta.

De acuerdo a lo establecido por el art. 14 de la ley 12.155, entre las funciones de la Policía de Seguridad no se encuentra la de custodiar y trasladar detenidos. Por el contrario, en el Capítulo IV del Libro II de la mencionada ley se crea y regula con ese objeto el Servicio de Custodia y Traslado de Detenidos, cuyas funciones, según la ley, serán ejercidas por el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Específicamente se prescribe que el Servicio de Custodia y Traslado de Detenidos, desarrollará su actividad en las llamadas Alcaldías Departamentales, organizadas éstas sobre la base de los departamentos judiciales existentes en la provincia (art. 40).

Es decir que las personas arrestadas o detenidas por la presunta comisión de delitos y contravenciones, deberían ser alojadas en estas alcaldías y no en las comisarías (art. 38). Los detenidos en el marco de un proceso penal tendrían que permanecer allí hasta que su situación procesal sea resuelta disponiéndose, en caso de que se dicte el auto de prisión preventiva, el traslado a una dependencia carcelaria propiamente dicha (art. 39).

En igual sentido se establece en la ley 12.256 que el cuidado y la asistencia de los “procesados” estará a cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Según lo expuesto, la circunstancia de que una persona permanezca privada de su libertad en una seccional policial resulta para la ley más que excepcional. A lo sumo, esta situación sólo podría tolerarse hasta el momento de ser presentada esa persona ante la autoridad judicial competente (art. 155 del CPP). Pero el desagradable panorama que nos

expone la realidad de nuestra provincia contrasta en forma grosera con lo estipulado normativamente.

En los calabozos de las comisarías se alojan no sólo contraventores y personas detenidas sin su situación procesal resuelta, sino también otras con prisión preventiva judicialmente impuesta e incluso algunos condenados. Todos ellos conviven hacinados en un espacio común y carecen de las más mínimas condiciones de habitabilidad, salubridad e higiene (cfr. fallo del Tribunal en lo Criminal n° 3, de Mar del Plata, cit.).

No existe justificación alguna que ampare el mantenimiento de este estado de cosas. Tal como ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “[e]stá más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda la sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero, por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana” (Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de Julio de 1988, Serie C n° 4, párr. 154).

Pero lo más grave de esta situación es que no sólo resultan afectados los derechos de los reclusos, sino que también se encuentran vulnerados el derecho a la seguridad personal y a mantener condiciones dignas y equitativas de trabajo de los agentes policiales asignados a la tarea de custodiar y trasladar detenidos (arts. 14 bis y 19 de la Const. Nac., y 10, 12 y 25 de la Const. de la Pcia. de Bs. As.) y el derecho a la seguridad personal y de sus bienes de los vecinos de las comisarías (arts. 10 y 12 de la Const. de la Pcia. de Bs. As.).

En efecto, los agentes policiales se ven forzados a trabajar también en condiciones indignas en un ámbito riesgoso para su salud. Las mismas probabilidades de contagio de enfermedades vinculadas con las condiciones que fueron descriptas son padecidas también por los integrantes de las fuerzas de seguridad afectados a la tarea de custodia, además de correr con los riesgos propios de situaciones de violencia extrema a las que la superpoblación conduce. Lamentablemente no son infrecuentes los motines y los intentos de fuga en los que se producen incendios, disparos y golpes o en los cuales los agentes policiales son tomados como rehenes.

Todo esto afecta también la dignidad y el profesionalismo del trabajador policial. Los agentes están siendo forzados a cumplir una tarea, para la cual no han sido capacitados, que no produce ningún beneficio social o personal y que sólo fomenta el deterioro de la identidad institucional. Las

organizaciones policiales han sido creadas para servir a la comunidad, en la prevención e investigación de delitos y en ello un policía encuentra la realización de su misión o de su tarea. La actual situación se opone al desarrollo de una institución policial profesional, dedicada al desarrollo de tareas específicas, que promueve el desarrollo profesional de cada uno de sus integrantes y no vulnera su integridad física salvo cuando sea necesario. La guarda permanente de personas, el cumplir funciones del servicio penitenciario, desdibuja el perfil de la institución, implica un menosprecio por la actividad policial como una profesión específica y por la integridad física y formación profesional de cada uno de sus integrantes.

Los vecinos, por supuesto, también sufren las consecuencias de este despropósito pues son los principales afectados por la irregular prestación del servicio estatal de seguridad. La afectación de policías al servicio de traslado y custodia de detenidos, impide que puedan atender debidamente los requerimientos de la comunidad en materia de prevención y represión de ilícitos. Obviamente, hay menos policías en la vía pública, los patrulleros son afectados al traslado de detenidos y el personal policial se encuentra sometido a una serie de demandas que impiden que se brinde plenamente a la comunidad, tal como correspondería. Por cierto, ninguna de estas disfunciones pasa inadvertida para los diversos actores que resultan afectados, tal como fue puesto de manifiesto en el marco de la acción de amparo que tramitó ante el Tribunal en lo Criminal Nro. 3 del Depto. Judicial de Mar del Plata a la que ya nos referimos.

Es decir, que esta situación, ilegítima de por sí, no produce beneficio alguno que posibilite siquiera un intento de justificación en términos meramente utilitarios.

b2) Niñas, niños y adolescentes detenidos en comisarías.

El alojamiento de niñas, niños y adolescentes en comisarías también es ilegal. La doctrina emanada de los distintos órganos de las Naciones Unidas que consagra el interés superior del niño, claramente exige que aquéllos sean alojados en establecimientos adecuados y el estado bonaerense ha infringido su obligación al respecto.

La Convención sobre los Derechos del Niño establece que “[l]os Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios e instalaciones responsables del cuidado o la protección de los niños se ajusten a las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número e idoneidad de su personal...” (art. 3ro.). En su artículo 37 señala que “[l]os Estados Partes velarán por que... c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que

se tengan en cuenta las necesidades físicas, sociales, culturales, morales y psicológicas de las personas de su edad... [y que] d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a... asistencia adecuada...”.

En el artículo 40 de esa Convención se señala que “1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño que sea considerado, acusado o declarado culpables de infringir las leyes penales a ser tratado acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tenga en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad...”.

Las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) establecen, por su parte, que los menores que se encuentren en prisión preventiva gozarán de todos los derechos y garantías previstos en las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas por las Naciones Unidas (Regla 13.3). También, que los menores estarán separados de los adultos y reclusos en establecimientos distintos o en recintos separados en los establecimientos en los que haya detenidos adultos (Regla 13.4).

Las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad traen un exhaustivo catálogo de las condiciones que deben reunir los centros de detención para adolescentes. Estas Reglas señalan, como criterio general, que “[d]eberá garantizarse a los menores reclusos en centros el derecho a disfrutar de actividades y programas útiles que sirvan para fomentar y asegurar su sano desarrollo y su dignidad, promover su sentido de responsabilidad e infundirles actitudes y conocimientos que les ayuden a desarrollar sus posibilidades como miembro de la sociedad” (Regla 12).

Las condiciones de detención de un menor conforme a ese cuerpo debe respetar las siguientes pautas: “[c]uando sea posible deberá darse a los menores de efectuar un trabajo remunerado y de proseguir sus estudios o capacitación, pero no serán obligados a hacerlo. En ningún caso se mantendrá la detención por razones de trabajo, de estudios o de capacitación” (Regla 18 b). La detención de los menores “se producirá en condiciones que tengan en cuenta plenamente sus necesidades y situaciones concretas y los requisitos especiales que exijan su edad, personalidad, sexo y tipo de delito, así como su salud física y mental, y que garanticen su protección contra influencias nocivas y situaciones de riesgo. El criterio principal para separar a los diversos grupos de menores privados de libertad deberá ser la prestación del tipo de asistencia que mejor se adapte a las necesidades concretas de los interesados y la

protección de su bienestar e integridad físicos, mentales y morales” (Regla 28).

Los menores privados de libertad tienen derecho “a contar con locales y servicios que satisfagan todas las exigencias de la higiene y de la dignidad humana” (Regla 31). El diseño de los centros de detención para adolescentes y el medio físico debe “responder a su finalidad, es decir, la rehabilitación de los menores en tratamiento de internado, teniéndose debidamente en cuenta la necesidad del menor de intimidad, de estímulos sensoriales, de posibilidades de asociación con sus compañeros y de participación en actividades deportivas, ejercicios físicos y actividades de esparcimiento. El diseño y estructura de los centros de detención para menores deberán ser tales que reduzcan al mínimo el riesgo de incendio y garanticen una evacuación segura de los locales. Deberá haber un sistema eficaz de alarma en casos de incendio, así como procedimientos establecidos y debidamente ensayados que garanticen la seguridad de los menores. Los centros de detención no estarán situados en zonas de riesgo conocidos para la salud o donde existan otros peligros” (Regla 32).

Las Reglas disponen también que los locales para dormir deberán mantenerse en buen estado, que las instalaciones sanitarias deben satisfacer las necesidades de las personas privadas de su libertad, que deberá facilitarse el acceso a la educación y a bibliotecas (Reglas 32 a 42). La Regla 47 dispone que “[t]odo menor deberá disponer diariamente del tiempo suficiente para practicar ejercicios físicos al aire libre si el tiempo lo permite... Para estas actividades, se pondrán a su disposición terreno suficiente y las instalaciones y el equipo necesarios. Todo menor deberá disponer diariamente de tiempo adicional para actividades de esparcimiento...”.

Con relación al personal, al Regla 82 dispone que “[l]a administración deberá seleccionar y contratar cuidadosamente al personal de todas las clases y categorías, por cuanto la buen marcha de los centros de detención depende de su integridad, actitud humanitaria, capacidad y competencia profesional para tratar con los menores, así como de sus dotes personales para el trabajo” (Regla 82); “[l]a administración deberá adoptar formas de organización y gestión que faciliten la comunicación entre las diferentes categorías del personal de cada centro de detención para intensificar la cooperación entre los diversos servicios dedicados a la atención de los menores, así como entre el personal y la administración, con miras a conseguir que el personal que está en contacto directo con los menores pueda actuar en condiciones que favorezcan el desempeño eficaz de sus tareas” (Regla 84). El personal “deberá recibir una formación que le permita desempeñar efectivamente sus funciones, en particular la capacitación en psicología infantil, protección de la infancia y criterios normas internacionales de derechos humanos y derechos del niño,

incluidas las presentes Reglas. El personal deberá mantener y perfeccionar sus conocimientos y capacidad profesional asistiendo a cursos de formación en el servicio que se organizarán a intervalos apropiados durante toda su carrera” (Regla 85).

Obligaciones similares pueden encontrarse en las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de RIAD).

En fin, resulta ostensible que la detención de menores en comisarías tal y como actualmente se produce en la provincia, no puede siquiera aspirar a ser considerada respetuosa de alguna de estas pautas. La ilegitimidad del encierro de adolescentes en comisarías bonaerenses es manifiestamente inconstitucional.

b3) Mujeres detenidas en comisarías.

En lo que se refiere a la situación de las mujeres que se encuentran detenidas en comisarías debe señalarse que esta circunstancia denota también una clara trasgresión a las pautas establecidas normativamente respecto de esta categoría de personas.

No sólo se prescribe que las mujeres deberán ser recluidas en establecimientos diferentes de los que les corresponden a los hombres (Regla 9 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas), sino que también se ordena que las embarazadas deberán ser albergadas en lugares especiales, aptos para su tratamiento y la atención de su parto (Regla 23.1; Principio 5.2. del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión de las Naciones Unidas, A.G. res. 43/173, anexo, 43 U.N. GAOR Supp. (nº 49) p. 298, ONU Doc. a/43/49, 1988; art. 16 ley 12.256).

Asimismo se establece que ninguna madre detenida podrá ser privada del contacto con su hijo mientras dure el estado de lactancia (Principio 5.2.; art. 17 ley 12.256), y que se deberá privilegiar la relación materno infantil en los lugares de detención en donde se alojen madres que convivan con sus hijos, brindándose un ambiente físico que satisfaga los intereses y las necesidades infantiles (Regla 23.1; art. 18 ley 12.256).

Sin dudas lejos están los calabozos de las comisarías de ser considerados lugares en donde se contemple en forma propicia la especial situación de la mujer, configurándose una flagrante violación a las normas vigentes.

VII- INFORME

La norma del artículo 409 CPP establece que se solicitará de inmediato al autor de la medida lesiva un informe escrito en el que se expliquen las razones que fundaron los actos atacados y, en su caso, las actuaciones labradas.

A fin de que la respuesta del Estado Provincial resulte útil a la solución del conflicto planteado, sugerimos a V.E. que se requiera al Poder Ejecutivo de la Provincia la información que se señala:

1. Número total de plazas por dependencia, criterios para determinar las plazas y número y nómina total de detenidos por plaza.
2. Número total y nómina de las personas detenidas en comisarías dependientes del Poder Ejecutivo Provincial en cumplimiento de órdenes emanadas de magistrados de la provincia, respecto de quienes su aprehensión haya sido convertida en detención (art. 151 CPP) y de quienes se haya dictado auto de prisión preventiva (art. 157 CPP).
3. Número total y nómina de las personas menores de 18 años de edad privadas de su libertad y alojadas en comisarías bonaerenses.
4. Número total y nómina de las mujeres privadas de su libertad y alojadas en comisarías bonaerenses.

Esta información, al igual que la requerida en el punto anterior es necesaria para el pleno despliegue de la jurisdicción. En todos los casos estimamos que deberá preverse un mecanismo a fin de contar con información actualizada al momento de la resolución, dada la rotación que existe en la composición de la población de cárceles y comisarías.

VIII- AUDIENCIA y PRUEBA

EL CPP autoriza la producción de prueba útil a la resolución del conflicto, así como la designación de audiencia con la presencia de todos los interesados.

La importancia de los derechos afectados y la gravedad de la situación que se denuncia justifican la realización de la audiencia prevista en el artículo 412 CPP a fin de que la cuestión suscitada sea resuelta bajo las máximas garantías de publicidad e intermediación en la recepción de la prueba. En razón de la extensión del conflicto y de la diversidad de actores e intereses involucrados, entendemos que la discusión abierta del problema justifican designar audiencia oral. Al mismo tiempo, la misma pluralidad de actores interesados justifica la utilización de este mecanismo que permitirá un trámite más ágil y fructífero del proceso.

Para dicha audiencia ofrecemos la siguiente prueba, útil a nuestra pretensión:

a. DOCUMENTAL:

a.1 Se acompañan fotografías de los calabozos de distintas comisarías de la Pcia. de Buenos Aires.

a.2 Se acompaña copia del informe producido por la Jefatura Departamental San Isidro, de fecha 26 de Septiembre de 2001.

a.3 Se acompaña copia del informe titulado "Alojamiento de Menores en Comisarías de la Provincia de Buenos Aires" (Editorial Policial de la Pcia. de Bs.As., 2001), producido por el Secretario Gral. del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Crio. Insp. Profesor Raul Marcelo Cheves, de fecha 27 de Junio de 2001, con motivo de la reunión del Consejo Provincial de Seguridad Pública (Ley 12.154/98).

a.4 Se requieran copias certificadas de las resoluciones dictadas por la Sala III de San Isidro y por el Tribunal Oral de Mar del Plata, citadas oportunamente, y se las incorpore a través de su lectura a la audiencia.

a.5 Se incorpore como elemento de convicción el informe del día 10 de Julio de 2001 del Sr. Defensor ante el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires.

a.6 Se acompañan copias de las noticias aparecidas en el Diario La Nación, edición digital del 4 de octubre de 2001.

b. INFORMATIVA:

b.1 Se incorpore por lectura la respuesta del Estado Provincial prevista en el artículo 409 CPP.

b.2 Se requiera a todas las jefaturas departamentales de la Policía de la Pcia. de Buenos Aires que informen detalladamente lo siguiente:

1º) Capacidad de alojamiento en los calabozos de las comisarías de la jurisdicción y cantidad real detenidos alojados, discriminados por nombre y apellido, en cada comisaría.

2º) Cantidad de menores de edad detenidos en comisarías de su jurisdicción.

3ª) Cantidad de mujeres embarazadas y madres en período de lactancia que se encuentran detenidas en las comisarías de su jurisdicción.

4º) Cantidad de detenidos con órdenes de remisión a Unidades del Servicio Penitenciario.

5º) Motines, fugas, tomas de rehenes y otras situaciones de violencia suscitadas en dependencias policiales desde el 01-01-2000 hasta la fecha.

6º) Cantidad de detenidos heridos como consecuencia de enfrentamientos con personal policial, durante el mismo período.

7º) Cantidad de personal policial herido como consecuencia de enfrentamientos con los privados de libertad, durante el mismo período.

8º) Total de gastos que irroga mensualmente a la Jefatura Departamental la atención de detenidos, alimentación, traslados, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, etc., identificación de las partidas presupuestarias correspondientes e información sobre si el presupuesto asignado es suficiente para afrontar tales erogaciones.

9º) Merma operativa aproximada, discriminada en cantidad de personal policial, móviles, etc., que provoca la atención y vigilancia de los reclusos y atención de las visitas.

10º) Si se efectúa relevamiento médico por parte de esa Jefatura y la periodicidad de éstos. Asimismo si se han detectado enfermedades infecto-contagiosas en algún interno y, en su caso, si la han tratado adecuadamente y si existen posibilidades reales de evitar eventuales contagios y propagación de ellas.

11º) Cantidad de personas que ingresaron como detenidas en los últimos seis meses y cuál ha sido, en el mismo período, la cantidad que ha dejado su alojamiento en comisarías, ya sea por remisiones a penales o por haber obtenido su libertad.

12º) Efectúe una evaluación sobre la problemática actual de alojamiento en comisarías y las consecuencias que potencialmente podrían derivarse del actual hacinamiento, tanto para las personas alojadas como así también para el personal policial y la comunidad que reside en la jurisdicción.

c. TESTIMONIAL:

c.1 Se cite a la audiencia a cinco personas detenidas, que V.E. determine, alojadas de distintas comisarías, a fin de que describan las condiciones de su alojamiento actual.

c.2 Se cite a la audiencia a cinco Secretarios de Ejecución, que V.E. determine, de distintos Departamentos Judiciales de la provincia a los mismos efectos.

c.3 Se cite a la audiencia a cinco jefes departamentales en actividad, que V.E. determine, a los mismos efectos.

c.4 Se cite a la audiencia al Secretario Gral. del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Crio. Insp. Profesor Raul Marcelo Cheves

c.5 Se cite a personal de la Policía Federal a fin de que describan las condiciones en que cumplen sus funciones en el ámbito de la Capital Federal.

d. PERICIAL

d.1 Se designe perito médico de oficio a fin de que, luego realizar una amplia inspección en diversos calabozos de distintas Seccionales policiales, de escuchar a los testigos y de examinar la prueba ofrecida expresen al tribunal cuáles son las consecuencias sobre la salud que la habitación en esas condiciones trae a quienes las padecen.

d.2 Se designe perito arquitecto de oficio a fin de que, luego realizar una amplia inspección en diversos calabozos de distintas Seccionales policiales, de escuchar a los testigos y de examinar la prueba ofrecida informe al tribunal sobre el estado edilicio y las condiciones de habitabilidad de esos lugares.

e. INSPECCION DE LUGARES

Se constituye el tribunal en los calabozos de diversas dependencias a fin de constatar mediante inspección ocular las condiciones imperantes.

IX- RESOLUCIÓN

I

La norma del artículo 415 CPP es amplia y ordena a V.E. rechazar o acoger la petición “resolviendo lo que corresponda”.

En virtud de ello y en función de considerar que resulta la solución más adecuada al conflicto planteado, solicitamos a V.E. que, verificadas las violaciones denunciadas, declare su ilicitud, ordene su cese actual y prevenga su reiteración futura, habilitando a tal fin una instancia de

ejecución en la que los interesados cuenten con amplias facultades a fin de dar satisfacción a lo ordenado por el tribunal.

II

Con relación a la declaración requerida no son necesarias complejas apreciaciones. La profusa normativa vigente en punto a las condiciones requeridas para la validez del alojamiento de una persona en una comisaría de la provincia de Buenos Aires ya fue citada y su exégesis no trae en el caso complicación alguna. Es ilegítimo el alojamiento de los detenidos en condiciones oprobiosas y es ilegítimo su confinamiento en institutos policiales, una vez realizados los primeros trámites en el proceso penal. La situación de los adolescentes y las mujeres, por último, tampoco puede ser tolerada frente a las garantías normativas existentes.

III

Tampoco hay dudas acerca de la utilidad del establecimiento de una instancia de ejecución. En el ámbito particular del trámite de las acciones de hábeas corpus la necesidad de establecer un ámbito de discusión amplio referido al cumplimiento de las órdenes del tribunal es imprescindible y la pluralidad de afectados, así como de derechos involucrados reclaman una especial atención a la articulación de los mecanismos reparadores y preventivos. En el caso, además, sus particularidades justifican sobradamente la actividad de V.E. en el diseño y seguimiento de los mecanismos que se establezcan para el cumplimiento de su orden.

Como señaló la Cámara Penal en la resolución citada más arriba, es tarea compartida de los poderes del estado el reglamentar, ejecutar y controlar todo lo relativo al cumplimiento de las condiciones mínimas en que se cumple la restricción de la libertad cualquiera sea el título en virtud del cual ésta ha sido impuesta (arg. art. 3, ley 12.256).

Sin perjuicio de que, como ya fue advertido, las prescripciones referidas a las condiciones de alojamiento no poseen total precisión en su definición ni consignan expresamente cuál ha de ser la consecuencia jurídica imputable a la verificación de su infracción, el deber de garantizar los derechos de las personas privadas de su libertad conlleva necesariamente cierto imperio sobre aquellas situaciones que resulten violatorias de tales derechos pues la asignación de competencias a un órgano jurisdiccional para que resuelva respecto de una serie de materias no puede tener ningún efecto útil si no se considera también que esa asignación importa, al menos, alguna facultad de disposición.

En este caso, tomar adecuado conocimiento de la situación irregular y ordenar el cese de los actos u omisiones lesivos resultan potestades inmediatas al mandato de garantía y, por ello, puede afirmarse que el

objeto primero de la decisión frente a la verificación de una infracción debe ser la modificación de las condiciones actuales de la detención para adecuarla a las prescripciones legales (respecto del contenido de la decisión en los hábeas corpus correctivos, cfr. M. Salt, “Los derechos fundamentales de los reclusos”; del Puerto, 1999, Bs. As., pág 287). Si tal modificación es inviable, no resultará posible evadir la discusión acerca la legitimidad de la continuación del encierro, no obstante la validez del origen del título en virtud del cual se impuso oportunamente la medida de coerción sobre la persona afectada.

En el sentido expuesto, existen numerosas decisiones judiciales adoptadas respecto de la situación de detenidos en las que fue ordenado el cese de algún acto u omisión de la administración penitenciaria en ejercicio de los deberes judiciales de contralor sobre las características del encierro (cfr., entre otras, las decisiones comentadas por Germán Bidart Campos “Un hábeas corpus en tutela de la dignidad de los detenidos”, ED t. 157 y “Un hábeas corpus exitoso cancela el traslado irrazonable de una persona privada de su libertad”, ED t. 135, pág. 747; o la decisión de la CCC de Gral. Roca, Sala IIIa., del 25 de octubre de 1995 con relación al recurso de amparo presentado por el Sr. Defensor del Pueblo de la Nación; JPBA t. 92, pág. 145; con comentario favorable de José Daniel Cesano en “Los objetivos constitucionales de la ejecución penitenciaria”, Alveroni, Córdoba, 1997, págs. 135 y 138), solución necesaria, por cierto, a fin de censurar los efectos de la infracción.

Esta facultad jurisdiccional, así entendida, parecería colidir contra las atribuciones que la ley 12.256 asigna al Servicio Penitenciario en los artículos 73 y 98, según las cuales el movimiento y distribución de los procesados, tanto como el movimiento, distribución, cambio de régimen y modalidades de los condenados corresponderán al Servicio Penitenciario, con comunicación al juez de ejecución o juez competente. La colisión, sin embargo, es solo aparente. Las facultades atribuidas al Servicio Penitenciario respecto de la ubicación de los internos sólo validan aquellas decisiones de la Administración que se adecuan al programa legal. En cambio, dado el elevado valor de los bienes jurídicos tutelados, allí donde el ejercicio de tales facultades, implica un acto ilegítimo en función de las características que el encierro debe tener, la ley asigna competencia al poder judicial en resguardo del derecho individual comprometido. No resulta de ello ninguna superposición de competencias: el acto que cohonesto el alojamiento en condiciones inadmisibles no puede nunca reclamar su aplicación preferida frente a la del acto de control jurisdiccional.

Sobre esta línea argumental también transita alguna jurisprudencia extranjera. En España la Sala de Conflictos señaló, en un supuesto parcialmente análogo al caso en examen, que la orden del Juzgado de

Vigilancia Penitenciaria nro. 1 de Barcelona que ordenó el cierre inmediato del departamento celular del centro penitenciario de Tarragona hasta que se modificasen sus condiciones de habitabilidad, había sido dictada dentro de las competencias propias de esa magistratura.

El tribunal que analizó la cuestión destacó que tanto el ámbito administrativo como el judicial han de insertarse en una concepción legal unitaria, en razón de lo cual, si bien la dirección, organización e inspección del ámbito penitenciario corresponde a la administración, no es posible admitir una tesis que suponga la inhibición de la jurisdicción en tal ámbito, toda vez que el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los jueces (cfr. Sentencia de la Sala de Conflictos resolutoria del conflicto de jurisdicción nro. 10/1986, de 9 de julio; cit. por Iñaki Rivera Beiras en, "Los derechos fundamentales de los reclusos", del Puerto, Bs. As. 1999, págs. 91/2).

El laconismo del régimen de la acción de hábeas corpus tanto respecto de la definición de las características precisas que debe observar el encarcelamiento legítimo de una persona, como respecto de las consecuencias específicas de su infracción, no puede erigirse en un enigma irresoluble que, bajo el pretexto de silencio legal, impida, en definitiva, todo contralor eficaz de los derechos de las personas detenidas.

Por ello es debido a la jurisdicción la solución de pretensiones correctivas colectivas; ello permitirá además "... la solución más eficiente de reclamos referidos a ciertos derechos que presentan una peculiar conformación si se los piensa de manera agregada. La superpoblación, el suministro de medicamentos, el mantenimiento general de un edificio, la provisión de alimentos, las prácticas regulares de requisas violentas, etc. reclaman una consideración global que un concepto individual de interés no parece satisfacer adecuadamente" (cfr. CELS, Informe Anual, Hechos 2000-Argentina 2001; Capítulo VI: Situación carcelaria: hacinamiento, violencia e indefensión; Siglo XXI, Buenos Aires, 2001, pág. 217). Otra solución consagraría una magistratura ausente. No obstante, el sentido que a Corte Suprema Nacional ha impreso a la actividad de ese poder de estado es otro. El recurso pretoriano esbozado en "Siri" o "Kot" marcan el camino que pretendemos.

IV

Abundante jurisprudencia nacional y extranjera ha advertido y reconocido ya la necesidad de establecer instancias de ejecución con relación a sus decisiones en materia de derechos constitucionales y ésta parece la solución más fructífera, pues la obligación estatal, lejos de tratarse de una

mera omisión o de una acción específica e inmediata, está compuesta de múltiples y variadas cargas positivas que necesariamente requieren planeamiento y despliegue a lo largo del tiempo.

En ámbitos muy diversos se han adoptado este tipo de soluciones. La Corte Suprema de Estados Unidos de Norteamérica, en el fallo *Brown v. Board of Education*, entre otros, dispuso el establecimiento de una compleja red de medidas tendentes a asegurar la integración de grupos étnicos y en particular respecto de los niveles de población en instituciones cerradas como los manicomios ha trazado una línea de jurisprudencia similar a la que se pide aquí. El Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ha establecido respecto del funcionamiento de los órganos de esa ciudad mecanismos más o menos duraderos para el contralor de sus decisiones y la Cámara de Apelaciones San Isidro, ha fijado ya la extensión de su control en materia de hábeas corpus.

El modo en que el aseguramiento de un derecho y la respectiva intervención jurisdiccional en el sentido que aquí pedimos se relacionan puede verse en el fallo de la Corte Constitucional de Sudáfrica, en el caso *The Government of the Republic of South Africa and others vs. Grootboom, Irene and others*², del 4 de octubre del 2000.

La Corte Constitucional de ese país se enfrentó a la cuestión de la justiciabilidad del derecho a la vivienda al analizar una apelación interpuesta por el gobierno sudafricano contra la orden de un tribunal de proveer refugio a 390 personas mayores de edad y 510 niños que habían sido desalojados de un terreno privado en la Provincia del Cabo Occidental.

La Corte decidió analizar el caso sobre la base del derecho de acceso a una vivienda adecuada. El punto de partida del análisis del tribunal fue entender a los derechos económicos y sociales como derechos justiciables a partir de su reconocimiento expreso en la Constitución³. Si bien el tribunal descartó la posibilidad de definir contenidos mínimos, estableció que, para ser razonables, las medidas gubernamentales deben atender a quienes más lo necesitan, a aquellos que se encuentran en una situación de mayor peligro o vulnerabilidad en el acceso al derecho social, más allá de su cobertura general. Luego de analizar la situación habitacional de esta

2 Corte Constitucional de Sudáfrica, caso CCT 11/00, *The Government of the Republic of South Africa and others vs. Irene Grootboom and others*.

3 “Los derechos económicos y sociales están expresamente reconocidos en la declaración de derechos de la Constitución y no puede decirse de ellos que existen sólo en el papel. La sección 7(2) de la Constitución requiere al Estado respetar, proteger, promover y garantizar los derechos constitucionales y los tribunales están obligados constitucionalmente a asegurar que esos derechos sean protegidos y garantizados. La cuestión entonces no es si los derechos económicos y sociales son justiciables en la Constitución sino cómo los hacemos efectivos en un caso determinado”.

población en la Provincia del Cabo Occidental sobre la base de información pública, la Corte concluyó que el programa estatal no brindaba ninguna solución de vivienda aplicable a los sectores con necesidades imperiosas.

La Corte emitió una orden declarativa por la cual requirió al Estado “actuar para cumplir la obligación... de diseñar, solventar, implementar y evaluar medidas para proveer solución a aquellas personas con necesidades de vivienda imperiosas”. A fin de auxiliar en la supervisión de la ejecución de la sentencia, la Corte puso a cargo de la Comisión de Derechos Humanos (*Human Rights Commission*)⁴ las tareas de controlar el cumplimiento del Estado y mantener informado al tribunal de los pasos que el Estado adopte para llevar a cabo la decisión.

Como se ve, el tribunal aceptó que el Estado tiene un gran abanico de posibilidades para satisfacer el derecho pero sometió la opción elegida por el Estado a un examen de razonabilidad. La Corte consideró que, adoptado un curso de acción por el Estado, el tribunal tiene la posibilidad de examinar si la alternativa elegida se adecua a las exigencias establecidas por la Constitución. Si de su examen surge que la decisión estatal excluye a grupos sociales merecedores de especial protección, la elección hecha por el Estado no se ajusta a la exigencia constitucional. No se trata de un análisis de oportunidad, mérito o conveniencia: la cuestión que se pone bajo escrutinio judicial es la idoneidad de las medidas adoptadas por el Estado para garantizar el acceso de grupos de personas en condición de particular precariedad al derecho.

En cuanto al problema del carácter político o técnico de la cuestión, que a veces se alega como límite a la actuación judicial, el aspecto central del fallo comentado es que el tribunal se apoya en un estándar jurídico y elabora desde allí el análisis de la política en cuestión. La pregunta relevante del caso no es la bondad de la política pública en general, sino la razonabilidad de la política pública para satisfacer el derecho de los peticionantes. El Estado tiene un amplio margen para decidir las medidas para satisfacer el derecho, pero debe –para dar cumplimiento al derecho en cuestión- cubrir también las necesidades del grupo afectado. La solución adoptada no es la de imponer al Estado una política específica, sino la de exigirle que tenga en cuenta las necesidades del grupo afectado que habían sido ignoradas por el diseño de la política llevada a cabo.

4 La Comisión de Derechos Humanos es un órgano constitucional de contralor. El art. 184 (1) de la Constitución de Sudáfrica le asigna la función de supervisar y evaluar la observancia de los derechos humanos en la República. La sección (2) del artículo le concede facultades para “(a) investigar y elaborar informes sobre la observancia de los derechos humanos”, y “(b) adoptar medidas para asegurar la reparación adecuada cuando un derecho humano haya sido violado”.

Con relación a los aspectos vinculados con la ejecución de la decisión judicial por el mismo Estado, debe destacarse, en primer lugar, que los términos de la decisión judicial requieren del Estado el diseño e implementación de un programa comprensivo que incluya la satisfacción del derecho de los peticionantes. Como puede notarse, no es la Corte Constitucional la que asume el diseño o implementación del programa: la decisión judicial se limita a constatar la omisión de medidas que tengan en consideración las necesidades de los peticionantes, y a exigir al Estado que las incluya dentro del diseño de la política pública correspondiente. El control de constitucionalidad funciona en estos casos como un diálogo entre los órganos del Estado, destinado a garantizar la supremacía de la Constitución sin perder de vista el alcance de las funciones y la diferente fuente de legitimación de los distintos poderes⁵.

V

La pregunta acerca de qué hacer aquí y ahora, frente al fenómeno de la superpoblación y el hacinamiento, teniendo en cuenta la necesidad de seguridad de las personas frente al delito no puede conducir a la inacción judicial.

Como afirma Elías Carranza, no podemos caer en una trampa inaceptable: “la responsabilidad estatal de velar por la seguridad de los habitantes y prevenir el delito no implica que deba haber personas hacinadas en las cárceles o que –como... decía Vivien Stern- ‘... quien fue encerrado durante dos años por hurtar una radio de 12 dólares deba ser castigado con el contagio de una enfermedad incurable’. La higiene en las cárceles y la eliminación del hacinamiento y otras penas crueles, inhumanos o degradantes, son responsabilidad inmediata del Estado, tanto como lo es la labor de prevención del delito” (Elías Carranza, *Sobrepoblación penitenciaria en América Latina y el Caribe*; en AAVV, *Justicia Penal y sobrepoblación penitenciaria*, Elías Carranza (coordinador); ILANUD, Naciones Unidas y Siglo XXI, 1ra. ed., México, 2001; pág. 34).

Como ha afirmado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, “Si el estado, cumpliendo con una función pública como lo es velar por la seguridad ciudadana, aísla y priva de su libertad a personas que han infringido la ley, debe hacerlo dentro del marco del respeto a los derechos humanos, como se ha comprometido, tarea que en el caso de la custodia de las personas privadas de su libertad corresponde al Poder Ejecutivo, siendo la labor del Poder Judicial... velar por que así se cumpla”

5 V. Gargarella, R., *La justicia frente al gobierno*, Ariel, Barcelona, 1996, pp. 174-177; Ferrajoli, L. “El derecho como sistema de garantías”, en *Derechos y garantías. La ley del más débil*, Trotta, Madrid, 1999, pp. 26-27.

(sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, de las nueve horas con veintiún minutos del veinticinco de agosto de dos mil –Res: 2000-07484), cit. por Carranza, op. cit, pág. 34).

La jurisprudencia de ese tribunal es particularmente rica en ejemplos respecto del modo en que el poder jurisdiccional puede satisfacer la obligación institucional cuyo satisfacción reclamamos aquí y así como más arriba fueron expuestos casos judiciales con relación a otros derechos, el tribunal costarricense es un buen ejemplo del compromiso institucional que la jurisdicción debe tener frente al problema de la superpoblación.

En varias sentencias, la Sala Constitucional le ha dado un plazo al Estado a fin de que incluya las partidas presupuestarias necesarias para resolver problemas de higiene, falta de colchones, etc y ha sido enérgica acerca de la obligación de cumplir con los compromisos de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas y de garantizar condiciones dignas de detención a los reclusos (cfr. Luis Paulino Mora Mora, Superpoblación penitenciaria y derechos humanos, en AAVV, Justicia Penal y sobrepoblación penitenciaria, Elías Carranza (coordinador); ILANUD, Naciones Unidas y Siglo XXI, 1ra. ed., México, 2001; págs. 64-5).

En la sentencia 709/91 de ese tribunal, por ejemplo, se dijo lo siguiente: “En el caso que nos ocupa, se plantea el conflicto entre el valor ‘seguridad pública’ protegido por la acción del Estado, y el valor ‘dignidad humana’, ya que el recurrente se queja de haber sido encarcelado en unas celdas que considera ofensivas a su dignidad, pues no reúnen siquiera las condiciones mínimas higiénicas, de comodidad y arquitectónicas, para mantener detenida a una persona, aunque sea por pocas horas... La Sala considera que... la actividad del Estado no tiene por qué producir transgresiones a los derechos fundamentales, ya que la existencia misma del Estado responde precisamente a resolver los problemas colectivos de una comunidad y no al contrario, que implicaría que la sociedad existe para preservar al Estado. Por esto, no pueden existir en un Estado de Derecho... tratamientos degradantes inflingidos a una persona bajo el pretexto de cumplir con una función pública, como lo es entre otras el resguardo de la seguridad ciudadana...

“La Sala reconoce que el problema de la construcción y mantenimiento de cárceles, ha sido tradicionalmente relegado por muchas sociedades por una concepción errada de la materia, considerándose que la inversión en este tipo de edificaciones no es una prioridad... La Sala, dentro de sus funciones de resguardo de los derechos fundamentales... tiene que declarar con lugar el recurso interpuesto, al haberse cometido a un ciudadano a un tratamiento contrario a su dignidad... por el mal estado físico de la cárcel [en] la que fue detenido, debido a la omisión inaceptable del Estado de construir adecuados centros de detención. Pero, por otra

parte, reconoce que la solución del problema requiere de una acción progresiva y sostenida, que no puede lograrse en pocos días o inclusive en pocos meses, de donde es necesario... otorgar al Ministerio de Gobernación y Policía un plazo prudencial pero perentorio para que la totalidad de las cárceles que utiliza para detenciones... sean puestas en condiciones que no ofendan la dignidad del detenido...

“Por tanto: / Se declara con lugar el recurso... se otorga al Ministerio de Gobernación el plazo perentorio de tres años contados a partir de la notificación de esta Sentencia para que ponga las cárceles que utiliza en condiciones que reúnan al menos los requisitos mínimos para albergar a un individuo... sin que se viole su dignidad. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados por el hecho que motivó este recurso, los cuales serán liquidados, en su caso, en la vía de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativ[o]...” (cfr. Mora Mora, cit. pág. 66, sin destacado).

La Sala Constitucional ha optado por dimensionar los efectos de la sentencia otorgando plazos de cumplimiento “... con el fin de permitirle al Estado la planificación necesaria para asegurar el efectivo cumplimiento del fallo. En Costa Rica, el Poder Ejecutivo debe contar con autorización legislativa para lograr –tras un largo proceso- la aprobación del presupuesto, de tal forma que nada haría el Tribunal Constitucional al solicitar el inmediato acatamiento de sentencias si el Poder Ejecutivo no está en posibilidad material de cumplirlas” (cfr. Mora Mora, cit. pág. 67).

En un sentido similar, por sentencia 2000-07484, en un caso sin precedentes en la región, ese tribunal, haciendo uso de sus potestades, ordenó a la ministra de Justicia que no recibiera más privados de libertad en el Centro de Atención Institucional de San José y que iniciara un proceso de disminución paulatina hasta llegar a la capacidad real de ese establecimiento, otorgando a tal fin un plazo de un año (cfr. Mora Mora, cit. pág. 67-8, sin destacado).

Esta jurisprudencia, al fin de cuentas, no es diversa en lo sustancial de aquella sentada por numerosos tribunales de la provincia en los últimos años que han ordenado reiteradamente la clausura de comisarías y centros de detención.

Sin embargo, las resoluciones parciales así producidas, sólo han generado el movimiento de internos de un lugar a otro, sin que, en definitiva, se dispusiese una solución al problema del alojamiento. Luego del movimiento de internos y reparada, en apariencia, la situación que motivó el remedio jurisdiccional, el colectivo de internos afectados deja de ser amparado por el tribunal del trámite con lo que la situación se repite *sine die*.

En este contexto, que la jurisdicción siga articulando remedios parciales, se asimilará paulatinamente a la aquiescencia antes que al control.

X- PETITORIO

Por todo ello, solicitamos a V.E.:

- I. Tenga por interpuesta la presente acción de Habeas Corpus y se nos tenga por parte y constituido el domicilio.
- II. Se requiera el informe en los términos solicitados.
- III. Designe audiencia y provea la prueba solicitada.
- IV. Oportunamente, haga lugar a la acción interpuesta, declare la ilegitimidad de las situaciones denunciadas y ordene su cese y reparación.
- V. Habilite una instancia de ejecución a fin de poder discutir todos los interesados las mejores condiciones a fin de dar satisfacción a lo ordenado por V.E.

SERA JUSTICIA

FORMULAN DENUNCIA DE HABEAS CORPUS

Excmo. Tribunal:

Los abajo firmantes respetuosamente nos presentamos ante V.E. y decimos

Que adherimos en sus términos a la presentación que en la fecha ha realizado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con relación a la situación de las personas detenidas en establecimientos policiales superpoblados y de todas aquellas detenidas en comisarías, a pesar de que legal y constitucionalmente, su alojamiento debería desarrollarse en centros de detención especializados.

Entendemos que ambas situaciones constituyen agravamientos arbitrarios de las condiciones de detención legal y por tal razón nos presentamos ante V.E. como denunciantes de los mismos hechos, a fin de que se ordene su cese y reparación y se impida toda reiteración futura (art. 405 CPP).

SERA JUSTICIA